El Defensor del Pueblo critica el reparto desigual de inmigrantes

Un 79,70% del alumnado de origen extranjero estudia en los centros públicos, frente al 20,30% que lo hace en los privados concertados. Según los últimos datos del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2000-2001, este porcentaje asciende ya al 81%. Sin duda, esta es una de las principales conclusiones del informe sobre la escolarización del alumnado de origen extranjero en el sistema educativo español durante el curso 2000-01, presentado por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica.

Los datos, en su mayoría aportados por las autoridades educativas del Estado y de las comunidades autónomas, no están plenamente actualizados. Una de las fuentes principales a las que remite el informe es el segundo estudio hecho público por CC.OO. en diciembre de 2002, sobre la escolarización de los hijos de inmigrantes en España.

El Defensor del Pueblo recomienda que, “dado que los centros privados concertados se financian también con fondos públicos, las políticas educativas han de tender a la redistribución homogénea del alumnado de origen extranjero entre la red pública y la privada concertada”.

Por ello insta a la supervisión “con extrema atención” de los procesos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. Incluso precisa que cuando las circunstancias lo requieran, se introduzcan en el régimen de admisión de alumnos “las medidas preventivas o cautelares precisas para garantizar la adecuada distribución del alumnado”. Más aún, recomienda que, cuando haya razones que lo justifiquen, se adopten “medidas proporcionadas para limitar el derecho a la libre elección de centro educativo para que la suma de voluntades no impida o dificulte el pleno ejercicio del derecho a la educación”. El Defensor del Pueblo considera que estas medidas deben aplicarse cuando la concentración de alumnado de origen inmigrante impida o dificulte gravemente el adecuado funcionamiento del servicio educativo.

También recomienda que se incremente el control de las autoridades educativas sobre el proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, a fin de garantizar su transparencia y la adecuación a las normas que lo regulan. Igualmente insta a que se adopten las medidas normativas y organizativas para que la escolarización de alumnos de origen inmigrante en centros concertados responda al peso específico de este sector en el conjunto de la oferta de plazas en los niveles de educación objeto de concierto.

Por último, propone que se arbitren las medidas necesarias, a través de cupos de reserva u otros similares, que posibiliten una equilibrada distribución del alumnado inmigrante entre los distintos centros, con independencia de su titularidad.

Por lo que respecta al profesorado, el informe señala que en términos generales considera que la presencia de alumnos y alumnas de origen inmigrante no influye negativamente en el rendimiento académico del grupo. Para el Defensor del Pueblo “se trata de una conclusión importante, ya que refuta la opinión, escasamente fundamentada, transmitida desde algunos sectores de que la causa del aumento de los conflictos en los centros educativos es la presencia de alumnos de origen inmigrante”.

Sin embargo, esta impresión positiva desaparece cuando el porcentaje de alumnado de origen inmigrante escolarizado en el centro supera el 30% e incluso el 50%. En estos casos

el profesorado cree que la presencia de escolares inmigrantes influye negativamente en el rendimiento académico del grupo, reduce la demanda de plazas escolares, afecta negativamente al prestigio del centro y a la convivencia entre el alumnado.

Asimismo, más de la mitad de los docentes que enseñan en estos centros afirman que el rendimiento académico disminuye considerablemente. También menos de la mitad sostiene que los alumnos que estudian en dichos centros adquiere una buena formación.

Esta percepción contrasta con la satisfacción de los alumnos, tanto autóctonos como inmigrantes, por la enseñanza que reciben. Además, consideran que en tales centros educativos se respetan más sus opiniones y valores que en aquellos en los que el porcentaje de estudiantes de otros países es inferior. Por último, se muestran más satisfechos con lo que aprenden, con las relaciones que entablan con sus profesores y con el funcionamiento del centro.

Como es lógico, la preocupación del profesorado aumenta en los casos de los centros con un porcentaje de alumnado inmigrante superior al 50%.

Entre las recomendaciones que figuran en el informe destacan la inclusión en los planes de estudios de las escuelas de formación del profesorado de contenidos y aprendizajes sobre la educación de alumnos de origen inmigrante, así como la elaboración de material didáctico adecuado.

Tampoco se eluden en el documento aspectos relacionados con las condiciones retributivas del profesorado al incidir en la conveniencia de tener en cuenta a efectos salariales el sobreesfuerzo que deben realizar los docentes en el centro para atender las necesidades educativas del colectivo de escolares inmigrantes. Incluso se baraja la posibilidad de darles gratificaciones, indemnizaciones o complementos de la retribución ordinaria “en términos proporcionales al sobreesfuerzo exigido en cada caso”.

La dotación de profesorado de apoyo es la medida más valorada por los docentes, según los resultados obtenidos en el estudio realizado por la Oficina del Defensor y Unicef. De ahí que en el informe se proponga dotar de este tipo de personal a todos los centros que escolaricen una cifra significativa de alumnado de origen inmigrante.

Además, sugiere que las medidas de apoyo arbitradas por las administraciones a favor de los centros que escolarizan a este colectivo de alumnos deben extenderse a los centros privados concertados en términos similares a los previstos para los centros de titularidad pública.

Pero mientras no se logre una distribución razonablemente equilibrada del alumnado de origen inmigrante entre los distintos centros sostenidos con fondos públicos, el Defensor del Pueblo propone que aquellos centros que escolaricen porcentajes elevados de este tipo de alumnado deberían ser objeto de medidas específicas, como por ejemplo la reducción de horario lectivo de los profesores para dedicar el tiempo restante a la coordinación de actividades, la preparación de materiales, la tutoría de alumnos o la atención a las familias.

Otra de las medidas propuestas en el informe es que las administraciones educativas garanticen la estabilidad de los equipos docentes en los centros.

El informe del Defensor del Pueblo señala que en los centros educativos con un porcentaje superior al 30% de alumnado inmigrante las valoraciones de la mayoría de los miembros de la comunidad escolar son negativas, y que más del 90% se ubican en entornos socioeconómicos desfavorecidos o deprimidos.

Por todo ello, insta a evitar la concentración excesiva en los centros de estudiantes procedentes de otros países. En el informe se arguye que si uno de los objetivos de la

educación de estos alumnos es la integración a todos los niveles, resulta necesario que el porcentaje de alumnos extranjeros no supere al de alumnos autóctonos, ya que en caso contrario no habría posibilidades reales de integración para el alumnado que procede de otras culturas.

El Defensor del Pueblo termina sus recomendaciones con una oportuna observación: hay que evitar que las medidas propuestas sean percibidas por la población autóctona de similares niveles socioeconómicos que el colectivo inmigrante como destinadas a favorecer a este último en detrimento de sus propias expectativas, “muy específicamente de obtención de ayudas económicas o de cualquier otra medida de apoyo en el contexto escolar”.

Por ello aconseja que se incrementen las dotaciones destinadas a proporcionar ayudas económicas a los alumnos de enseñanza obligatoria procedentes de familiares con menores niveles de rentas.

Integración escolar

Sólo un 36,5% del alumnado autóctono es partidario de la integración escolar de los inmigrantes y un 15,6% en el caso de los alumnos de origen inmigrante. Un 21,8% de los autóctonos y un 29,3% de los de origen inmigrante preferirían ir a un colegio en el que sólo hubiera compañeros de su mismo país, lo que, según el informe, demuestra que no están satisfechos con la experiencia que tienen en sus centros.

Uno de cada tres escolares autóctonos muestra reticencias ante la inmigración. Esta opinión aumenta de forma significativa entre los alumnos de Secundaria, aunque se reduce cuando las preguntas se refieren a los compañeros de origen inmigrante que estudian en su centro.

Son los estudiantes procedentes de países del Este de Europa los que manifiestan una actitud más crítica hacia la integración escolar de alumnos de otros países, así como hacia la posibilidad de que se lleve a la escuela la vestimenta tradicional. Los autores del informe creen que esta actitud podría deberse a que estos alumnos no han aprendido a convivir en sus países de origen con grupos de otras culturas.

Los autóctonos escolarizados en centros con más de un 30% de inmigrantes manifiestan una actitud favorable hacia la integración. En cambio, los profesores que imparten en este tipo de centros son los que se declaran más insatisfechos.

El Defensor del Pueblo se muestra comprensivo con esta reacción, dado que para los profesores atender a un gran número de alumnos procedentes de otros países “supone una gran cantidad de trabajo que, en ocasiones, realiza sin disponer de recursos y estrategias suficientes”.

A esta situación hay que añadir el que los centros con más alumnos de origen inmigrante son los de nivel económico más bajo y, por tanto, aquellos en los que se puede presentar una problemática especial añadida.

Madrid, Cataluña y Andalucía, a la cabeza en escolarización de inmigrantes

En el curso 2000-2001 un 33,70% de los alumnos de origen inmigrante provenían de América Latina y el Caribe, seguidos de los procedentes de África (31,52%) y especialmente del Magreb (26,83%). Ese mismo curso la Comunidad de Madrid escolarizaba al mayor

número absoluto de alumnos de origen extranjero (el 28,78%), seguida de Cataluña (18,26%), Andalucía (11,23%), Canarias (7,835) y la Comunidad Valenciana (7,14%).

Por el contrario, son las comunidades de Cantabria (0,47%), La Rioja (0,63%), Asturias (0,94%) y Extremadura (0,99%) las que acogen al menor número de escolares foráneos.

El mayor incremento de este alumnado se registró en Ceuta, seguido del de Madrid que ese curso superó a Cataluña y de Baleares.

El rendimiento académico de los escolares procedentes de América Latina y de Europa del Este es superior al del restante alumnado de origen inmigrante, especialmente en Primaria y en el primer ciclo de la ESO. El dominio de la lengua parecer ser el factor que explicaría los resultados del alumnado latinoamericano. No obstante, el informe destaca que los resultados obtenidos por los alumnos del Este de Europa “hacen pensar que también la escolarización previa y la cultura de origen son variables a tener en cuenta”.

Para los alumnos procedentes de países africanos, el defensor del Pueblo sugiere debe incidirse en los factores causantes de las reducidas expectativas académicas que manifiestan.

El 75,2% del profesorado, a favor de la integración

Un 75,2% del profesorado acepta de buen grado la integración escolar del alumnado de origen inmigrante. Según el informe del Defensor del Pueblo, esta actitud se basa más en el derecho a la educación que en la valoración de la inmigración como una experiencia positiva.

La mayoría de alumnos reconoce que sus profesores no muestran preferencia por sus estudiantes, un dato que el informe considera muy interesante al revelar “una ausencia total de discriminación por parte del profesorado”.

Escasa participación familiar en el centro

Las familias de inmigrantes participan menos que las autóctonas en los centros educativos porque, según el profesorado, tienen un escaso dominio de la lengua, un bajo nivel educativo y se involucran poco en el proceso escolar de sus hijos.

Según el Defensor del Pueblo, las expectativas de las familias inmigrantes con respecto al futuro académico de sus hijos son más altas que las de las familias autóctonas, lo que se explica porque el nivel sociocultural de las familias de otros países, que han participado en la muestra, se sitúa por encima del de las familias autóctonas.

Las familias latinoamericanas son las que depositan más expectativas en el futuro académico de sus hijos, mientras que en el otro extremo se sitúan las familias de origen africano.